

■ **Albergarán habitantes de comunidades en riesgo de desastre, dice**

Desarrollo, el objetivo de Ciudades Rurales: gobierno de Chiapas

■ **Rechaza que los reubicados vayan a perder la propiedad de tierras**

■ **Participan PNUD, BID, la iniciativa privada, el estado y la Federación**

■ **ÁNGELES MARISCAL**

OSTUACÁN CHIS., 31 DE AGOSTO. A unos cinco kilómetros de la ribera del Grijalva, en una extensión de 50 hectáreas, se levantan 410 viviendas. En los extremos, en las zonas altas, se encuentran ocho invernaderos donde desde hace unos meses se cultiva jitomate; hay una planta tratadora de leche, una procesadora de cacao y una granja apícola. Están en construcción un centro de educación básica y otro de salud. Es la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva.

Según el proyecto del Instituto de Población y Ciudades Rurales de Chiapas, la obra está diseñada para albergar a habitantes de cinco ejidos, tres comunidades y tres rancherías que reúnen tres características: están en zonas de riesgo por derrumbes, deslaves e **inundaciones**; sus viviendas están dispersas y carecen de **servicios** básicos, y sus habitantes padecen altos niveles de marginación.

El proyecto forma parte del Plan Estatal de Desarrollo 2006-2012; sin embargo, el derrumbe ocurrido el 4 de noviembre de 2007 obligó a acelerar las obras de la primera ciudad rural del país.

El gobierno de Chiapas informó que, desde el comienzo, el Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo (PNUD) ha estado al tanto de este proyecto, diseñado por sociólogos, antropólogos y otros expertos, investigadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de Chiapas, entre otras instituciones.

Durante los 21 meses recientes se han invertido en la construcción de la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva 487 millones 714 mil 419.29 pesos, según el gobierno estatal. Sesenta por ciento son recursos federales del ramo 23 (aportaciones y subsidios), 25 por ciento han sido recursos estatales y el 15 por ciento restante, donaciones de la iniciativa privada.

Las empresas que han aportado recursos son Banorte, Maseca, Fundación Televisa, Fundación Telmex, Grupo Carso, Fondo Social Banamex, BBVA Bancomer, las fundaciones Río Arronte y Azteca, Techos Mexalite, Cementos Cruz Azul, Farmacias del Ahorro, Ecoblock Internacional y organismos como Natura y Ecosistemas Mexicanos. Este último desarrolla diversos proyectos en la selva Lacandona.

También se cuenta con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización

de Naciones Unidas, a través del PNUD, y embajadas, indica el informe del gobierno estatal.

El director del Instituto Ciudades Rurales Sustentables, Antonio Molina Franco, aclaró que los pobladores —provenientes de 11 comunidades dispersas— contarán con **servicios** de educación, salud, **agua potable** y proyectos productivos que generarán altos ingresos, entre otros beneficios.

Explicó que los beneficiarios no perderán el patrimonio de las tierras que habitaban, sino que seguirán siendo de su propiedad y se utilizarán en proyectos productivos que les beneficiarán. “El gobierno garantiza el derecho de los propietarios originales y legítimos”, señaló.

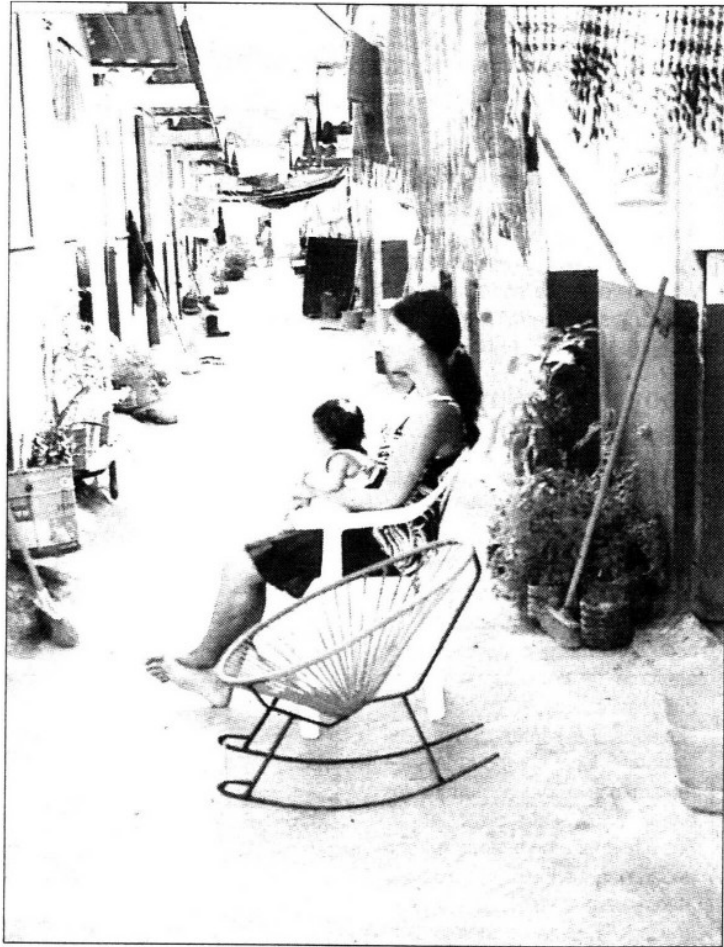
Molina Farro insistió: “Únicamente cambia el uso del suelo, a fin de que no regresen a vivir a sitios de riesgo o en dispersión.

Lo importante de estos proyectos es que los pobladores de Nuevo Juan del Grijalva percibirán ingresos diarios seis veces superiores al mínimo recomendado por Naciones Unidas”.

En esta nueva ciudad los niños podrán estudiar los tres grados de preescolar, los seis de primaria y la secundaria. Habrá equipo de cómputo y conexión a Internet, aseguró.



Fecha 01.09.2009	Sección Estados	Página 29
----------------------------	---------------------------	---------------------



Vista del campamento para desplazados en Ostuacán, Chiapas, donde numerosas familias esperan ser reubicadas en la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva, tras haber perdido sus hogares a causa del deslave y las inundaciones ocurridas el 4 de noviembre de 2007 ■ Foto Moisés Zúñiga Santiago